

Política, narrativa y malas prácticas

“...basta ver la situación crítica de varias universidades estatales para entender que extender la dependencia de todo el sistema universitario al financiamiento del Estado es una mala idea...”.

JULIO CASTRO

Rector Universidad Andrés Bello

Con sorpresa leí una columna en este medio donde dos investigadores critican a universidades que se oponen al proyecto del Gobierno para crear el nuevo sistema de Financiamiento a la Educación Superior (FES). Sorprende porque sus argumentos se centran en acusaciones ideológicas y en la supuesta defensa de un “negocio” universitario, ignorando los serios problemas del proyecto, ampliamente expuestos por diversos actores.



Tomando ello como ejemplo me parece relevante, para una mejor comprensión del debate, contextualizar esta discusión. Primero, estamos en año electoral. Segundo, el FES es un proyecto emblemático del Gobierno que enfrenta cuestionamientos transversales, lo que dificulta su avance legislativo.

Entendiendo que ese escenario genera una crispación a nivel político, se hace imperativo recordar el objetivo que debieran tener todas las políticas en esta materia: asegurar que cada estudiante, sin importar su origen, acceda a una formación de calidad.

Los argumentos que se han esgrimido desde las universidades contra el FES no son ideológicos, como se ha buscado insinuar, sino técnicos. La iniciativa está mal diseñada, no se hace cargo de los problemas del sistema y sus consecuencias preocupan a expertos y

representantes de universidades estatales, privadas tradicionales y no tradicionales.

Pocas veces se ha visto una oposición tan transversal por razones tan coincidentes.

El proyecto crea un impuesto para los egresados; los obliga a pagar hasta por 20 años un porcentaje de sus ingresos, lo que podría incluso duplicar o triplicar su deuda original; no les permite endeudarse por el monto que necesiten, sino por el total del arancel regulado fijado por el Estado; además, desfinancia a las universidades; elitiza al sistema poniendo incentivos a la matrícula de alumnos de más altos ingresos; y genera una dependencia total del Estado y, por tanto, del Gobierno de turno. Ejemplos de lo no cívico que es eso para la autonomía de las universidades hay muchos, y muy recientes.

Se ha mencionado la expansión internacional de UNAB como muestra del “negocio” educativo generado por el crecimiento de la matrícula.

Que Universidad Andrés Bello proyecte su modelo al exterior y genere oportunidades para su comunidad en uno de los ecosistemas universitarios más avanzados del mundo es una gran noticia para su comunidad y también para el país, siendo ello consecuencia de la madurez de su proyecto institucional, la responsabilidad de su gestión y preferencia de los estudiantes, quienes priorizan UNAB por sobre muchísimas universidades, incluso varias de las gratuitas.

Nos enorgullece ser la universidad más grande de Chile porque creemos firmemente en que el sistema debe dar oportunidades, no

restringirlas. Gracias a una gestión responsable, hemos tenido un crecimiento sostenido, que va acompañado de inversiones y becas acorde a ese desarrollo, de mejoras en calidad y de procesos.

Hemos invertido más de \$140.000 millones durante los últimos tres años para el bienestar estudiantil y para el desarrollo de la ciencia que Chile tanto necesita; solo este 2025 apoyamos a más de 31.000 estudiantes con becas y beneficios de arancel, sin contar otra serie de apoyos internos; hemos innovado y mejorado nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje para formar mejores profesionales. ¿Y qué pasa con los excedentes? Se reinvierten en el propio proyecto universitario.

Aquí quiero detenerme y hacer el contraste: basta ver la situación crítica de varias universidades estatales para entender que extender la dependencia de todo el sistema universitario al financiamiento del Estado es una mala idea. Volvemos a las críticas al FES.

Para generar un debate sano, debemos dejar de lado malas prácticas, la tergiversación y la narrativa construida para desviar críticas. Cualquier reforma debe centrarse en cómo asegurar un sistema que combine calidad, inclusión, diversidad y sostenibilidad, sin imponer restricciones que comprometan su viabilidad.

En un año electoral, el país necesita un debate serio y basado en evidencia. Los discursos e intenciones no bastan para hacer buenas políticas públicas. Al final, es Chile quien sufre las consecuencias.